INFORME INTERNACIONAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA 2017

BOLIVIA

Resumen Ejecutivo

La constitución estipula que el estado es independiente de la religión y establece "la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresada individual o colectivamente, en público y en privado". La constitución y otras leyes otorgan a las instituciones educativas el derecho de enseñar religión, incluidas clases sobre creencias espirituales indígenas. En septiembre, el ministro de Relaciones Exteriores inauguró una nueva oficina con el fin de agilizar el proceso para que las organizaciones religiosas y espirituales registren su estatus legal, modifiquen sus estatutos, sus reglamentos internos y la estructura de sus respectivos órganos administrativos ante el gobierno. Líderes religiosos de varios grupos cristianos y no cristianos continuaron expresando su preocupación de que la ley de registro del país podría amenazar su capacidad para operar de manera independiente y podría favorecer a determinados grupos religiosos. Líderes eclesiásticos continuaron trabajando con el gobierno en una propuesta legislativa para eximir a las iglesias de los requisitos de registro por los próximos cinco años; sin embargo, dijeron que tenían poco acceso a funcionarios del gobierno respecto a otros asuntos. Según fuentes de la comunidad protestante evangélica, varias comunidades religiosas más pequeñas con "iglesias domésticas" todavía preferían no registrar sus organizaciones, declarando que no querían proporcionarle al gobierno acceso a información interna privada. En julio, el tribunal constitucional denegó una petición presentada en 2015 por líderes protestantes evangélicos impugnando la ley de registro religioso; ninguna parte interesada apeló la decisión del tribunal. Las tensiones entre los líderes de la iglesia cristiana, particularmente los católicos, y funcionarios del gobierno continuaron, dado que funcionarios del gobierno criticaron a los representantes de la iglesia por pronunciarse sobre la democracia, el aborto y los asuntos transgénero. Líderes protestantes y de la Iglesia Católica dijeron que el gobierno continuó empleando rituales y prácticas étnicas aymaras durante eventos y ceremonias gubernamentales, que según algunos líderes cristianos contravenían la separación constitucional entre religión y estado.

Líderes protestantes evangélicos declararon que hubo incidentes en los que líderes religiosos indígenas golpearon a varios de sus pastores y los expulsaron de áreas rurales porque los pastores se habían negado a participar en prácticas y rituales ancestrales.

El acceso de la embajada de los Estados Unidos a los funcionarios del gobierno todavía fue limitado a pesar de las solicitudes de reuniones por parte de la embajada. El personal de la embajada se reunió regularmente con líderes religiosos para subrayar la importancia de la libertad religiosa. El Encargado de Negocios organizó una reunión interreligiosa para líderes religiosos en octubre.

Representantes de las comunidades cristianas evangélicas, católicas, metodistas, judías y musulmanas participaron. Los temas abordados incluyeron el respeto del gobierno por la libertad y las prácticas religiosas, el presunto favoritismo del gobierno hacia ceremonias y rituales religiosos andinos, y las tensiones de larga data entre la comunidad católica y la administración del presidente Evo Morales.

Sección I. Demografía Religiosa

El gobierno de los Estados Unidos estima la población en 11.1 millones (estimación de julio de 2017). Según cifras del gobierno de los Estados Unidos, 77 por ciento de la población se identifica como católica romana y el 16 por ciento como protestante, incluidos grupos evangélicos y pentecostales. Aproximadamente el 5 por ciento se identifica con grupos religiosos más pequeños y el 5 por ciento se identifica a sí mismo como no creyente. Hay aproximadamente 250 musulmanes y aproximadamente 450 judíos, según los líderes de las respectivas religiones. Muchas comunidades indígenas, concentradas en áreas rurales, practican una mezcla de tradiciones "espirituales" católicas e indígenas.

Sección II. Estado del Respeto del Gobierno por la Libertad Religiosa

Marco legal

De acuerdo con la constitución, el estado respeta y dispone la "libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto", expresada individual o colectivamente, en público y en privado. La constitución estipula que el estado es independiente de toda religión.

La constitución prohíbe la discriminación religiosa, incluyendo el acceso a instituciones educativas, servicios de salud y empleo, y protege el derecho de acceso a actividades públicas deportivas y recreativas independientemente de la religión.

La ley requiere que los grupos religiosos se inscriban como ONG en la Unidad de Cultos y Organizaciones No Gubernamentales del Ministerio de Relaciones

Informe sobre Libertad Religiosa Internacional para 2017

Departamento de Estado de los Estados Unidos • Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo

Exteriores, para operar legalmente. De conformidad con un acuerdo con la Santa Sede, la Iglesia Católica está exenta de la ley de inscripción.

Según la Unidad de Cultos y Organizaciones No Gubernamentales del Ministerio de Relaciones Exteriores, las organizaciones religiosas deben cumplir 14 requisitos para registrar sus organizaciones ante el gobierno. Las organizaciones deben presentar sus documentos legales notariados, incluyendo estatutos, reglamentos y procedimientos internos; documentos de contrato de alquiler, facturas de servicios públicos correspondientes a los lugares de culto y un mapa del lugar; información detallada sobre los miembros de la junta directiva y representantes legales, incluidas verificaciones de antecedentes penales; un certificado de INTERPOL para extranjeros; y prueba de solvencia fiscal. También deben proporcionar el organigrama de la organización, con nombres, direcciones, números de cédulas de identidad y fotografías; una lista completa de miembros y su información de identificación; detalles sobre las actividades y servicios proporcionados por la organización, incluida la ubicación de los servicios; e información sobre su(s) fuente(s) de financiamiento, nacional(es) y/o extranjera(s).

Los requisitos para las organizaciones espirituales difieren de los requisitos para las organizaciones religiosas, pero exigen esencialmente el mismo tipo de información. La constitución define una organización espiritual como un grupo de personas naturales, nacionales y/o extranjeras que se organizan para llevar a cabo prácticas que desarrollan su espiritualidad de acuerdo con su cosmovisión ancestral. La mayoría de las organizaciones espirituales son indígenas en sus orígenes. La constitución define una organización religiosa como un grupo de personas naturales, nacionales y/o extranjeras que se organizan con el propósito de llevar a cabo prácticas de culto y/o creencia alrededor de un Ser Supremo, con el fin de desarrollar su espiritualidad y religiosidad, y cuyo propósito no persigue el lucro.

El gobierno puede revocar la licencia de funcionamiento de una organización si la organización no presenta un informe anual de actividades por más de dos años consecutivos; no cumple con sus objetivos establecidos; lleva a cabo actividades diferentes a las establecidas en su estatuto; o lleva a cabo actividades contrarias a la constitución, las leyes, la moral o las "buenas costumbres" del país. Una organización religiosa o espiritual también puede perder su licencia de funcionamiento si no cumple con el plazo para renovar la licencia.

Durante el año, el gobierno promulgó un nuevo reglamento que exige a los grupos religiosos y espirituales que vuelvan a inscribir sus licencias de funcionamiento para garantizar que todos los documentos lleven el nombre oficial del país como "Estado Plurinacional". Antes de este nuevo requisito, las organizaciones podían funcionar con una versión anterior de las licencias que llevaba el nombre del estado como "República de Bolivia". La reinscripción también requiere que las enmiendas a los estatutos de las organizaciones se ajusten a todas las nuevas leyes nacionales. Las organizaciones deben cumplir con los nuevos requisitos de inscripción hasta el año 2019. Los grupos religiosos inscritos reciben beneficios tributarios, aduaneros y otros beneficios legales.

Las tarifas para obtener una licencia de funcionamiento difieren entre "Organizaciones religiosas" y "Organizaciones espirituales" con un costo de Bs. 6,780 (USD 990) y Bs. 4.068 bolivianos (USD 590), respectivamente.

El gobierno se reserva el derecho de revocar el permiso de funcionamiento de una organización por incumplimiento de los requisitos de inscripción. El gobierno no puede denegar reconocimiento legal a ninguna organización sobre la base de sus artículos de fe.

La constitución y otras leyes brindan a las instituciones educativas la opción de enseñar clases de religión, incluidas clases de creencias espirituales indígenas, con el objetivo declarado de fomentar el respeto mutuo entre las comunidades religiosas. Si bien las clases de religión son opcionales, las escuelas deben enseñar ética con materiales curriculares que promuevan la tolerancia religiosa. El gobierno no restringe la enseñanza religiosa en escuelas públicas o privadas y no restringe la asistencia de un alumno a escuelas privadas afiliadas a una religión. La ley también exige que todas las escuelas acepten estudiantes independientemente de su afiliación religiosa.

El país es parte del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles.

Prácticas del Gobierno

Según miembros de la comunidad cristiana evangélica, varias comunidades religiosas pequeñas que formaban "iglesias domésticas", también conocidas como lugares de culto no oficiales, continuaron negándose a registrar sus organizaciones, declarando que preferían no proporcionar al gobierno acceso a información personal interna. Las fuentes indicaron que estos grupos no registrados no podían poseer propiedades ni tener cuentas bancarias a su nombre; sin embargo, las

fuentes dijeron que el gobierno no interfirió con estas organizaciones por su negativa a cumplir con la ley.

El 23 de septiembre, el ministro de relaciones exteriores inauguró la Ventanilla Única de Cultos, una oficina diseñada con el fin de ayudar a agilizar el proceso para que organizaciones religiosas y espirituales registren su estatus legal, modifiquen sus estatutos, reglamentos internos y la estructura de sus respectivos cuerpos administrativos ante el gobierno. El objetivo de la nueva oficina, de acuerdo con funcionarios del gobierno, fue garantizar que los requisitos de inscripción estuvieran en concordancia con la constitución. Las entidades religiosas afectadas por este nuevo reglamento pudieron revisar la redacción final y el marco técnico legal de la Ventanilla Única. La oficina de la Ventanilla Única comenzó a operar a través del Ministerio de Relaciones Exteriores el 25 de septiembre.

A finales de año, el registro de la Unidad de Cultos y Organizaciones No Gubernamentales del Ministerio de Relaciones Exteriores siguió conteniendo 434 grupos religiosos registrados y aproximadamente nueve grupos religiosos en proceso de inscripción: las mismas cifras que en 2016. La complejidad del procedimiento de inscripción, incluyendo el registro del nombre legal de la organización, presuntamente ocasionó que muchas organizaciones buscaran asistencia legal para cumplir los requisitos.

Líderes eclesiásticos continuaron trabajando con el gobierno en una propuesta legislativa eximiendo a las iglesias de los requisitos de inscripción por los próximos cinco años. En julio, el tribunal constitucional denegó una petición presentada en 2015 por líderes protestantes evangélicos que impugnaba la ley de registro religioso; ninguna parte interesada apeló la decisión del tribunal.

La Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia envió una carta al Ministro de Relaciones Exteriores el 27 de septiembre, abordando lo que calificó como un trato preferencial de parte del gobierno a los grupos indígenas y citando como ejemplo la diferencia en la estructura de tarifas para obtener licencias de funcionamiento para grupos espirituales y religiosos. El gobierno no respondió a la solicitud durante el año.

Líderes del gobierno continuaron criticando a los líderes religiosos que comentaron públicamente sobre asuntos políticos. En octubre, el obispo Ricardo Centellas Guzmán, presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) que agrupa a los obispos católicos, dijo que el país no podía permitirse volver a elegir al presidente

Morales por un cuarto mandato, en ese momento inconstitucional, por temor a que el país democrático se convirtiera en "una dictadura". El presidente respondió directamente a los comentarios del obispo y dijo: "Algunos curas no aguantan que los indios sean presidentes".

El 10 de diciembre, el secretario general de la CEB Aurelio Pesoa respondió a la decisión del tribunal constitucional del 28 de noviembre que permitía al presidente Morales buscar la reelección indefinida, indicando que estas decisiones ponían de relieve un "retroceso" de los derechos y las libertades democráticas en el país durante el año. Varios líderes religiosos también dijeron que el acceso al gobierno y su capacidad para estar en desacuerdo con el gobierno en cuestiones políticas era limitado.

Un representante de la comunidad judía declaró que la comunidad judía no tenía contacto con el presidente y que no había cultivado ningún tipo de relación con la administración de Morales.

El 12 de abril, la CEB rechazó la propuesta legislativa del gobierno que hubiera despenalizado el aborto bajo ciertas circunstancias y declaró que el gobierno excluyó a la Iglesia Católica del debate oficial con respecto a dichos cambios a la legislación actual. La CEB también acusó al gobierno de discriminar contra las creencias religiosas de la "mayoría de la población boliviana", que declaró era contraria al aborto. El presidente Morales afirmó que los altos funcionarios del gobierno no eran responsables del proyecto de ley y que la Asamblea Legislativa, que funcionaba como una entidad independiente del poder ejecutivo, tenía el control total del proceso legislativo. La Cámara de Diputados aprobó la medida el 28 de septiembre y la envió al Senado para su aprobación. El 6 de diciembre, el Senado aprobó por dos tercios de los votos y sin enmiendas el artículo 157 del código penal, que detalla la legalidad del aborto bajo ciertas circunstancias.

En febrero, la Cámara de Diputados ratificó las convenciones de la OEA contra la discriminación y la intolerancia y contra el racismo y la discriminación racial. Las organizaciones religiosas, incluidas las iglesias católica y protestante, así como instituciones de la sociedad civil se opusieron a la ratificación del gobierno sobre la base de que la ambigüedad y la amplitud de las definiciones de "intolerancia" en las convenciones podrían violar la libertad de expresión y religiosa.

Grupos cristianos continuaron objetando ante el gobierno la legalidad de una ley de identidad de género de mayo de 2016 que permite a las personas transgénero cambiar oficialmente su nombre y género para reflejar su sexo elegido en todos los documentos oficiales. En junio, la CEB y las Iglesias Evangélicas Unidas presentaron una solicitud formal al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que revisara la constitucionalidad de la ley. Los representantes de la Iglesia Católica declararon que buscaban defender la "familia nuclear, el matrimonio entre un hombre y una mujer, y los valores y principios que la familia aporta a la sociedad", a través de la impugnación constitucional. El 9 de noviembre, el TCP dictaminó que una parte de la ley de identidad de género era inconstitucional, específicamente el artículo que permitía a las personas transgénero "ejercer todos los derechos fundamentales, políticos, laborales, civiles, económicos y sociales". La mayoría de los observadores dijeron que la decisión significaba que las personas transgénero ya no tenían el derecho de casarse o de adoptar un niño.

Varios líderes protestantes evangélicos declararon que funcionarios del gobierno continuaron siendo anfitriones y participando en reuniones interreligiosas, pero que el gobierno a menudo comenzaba con un ritual ligado a un grupo de fe indígena en lugar de con el ritual de otro grupo que asistía al evento. Algunos líderes protestantes dijeron que los funcionarios del gobierno asistían a las ceremonias religiosas de algunas denominaciones más a menudo que a otras; también dijeron que el gobierno dio preferencia a ciertos grupos para participar en ceremonias oficiales. Sin embargo, otros observadores dijeron que altos funcionarios del gobierno, incluido el vicepresidente y los gobernadores regionales, también asistieron a misas católicas en calidad de autoridades oficiales.

Líderes protestantes evangélicos y católicos dijeron que el gobierno continuó favoreciendo una filosofía espiritual andina, especialmente la filosofía de la comunidad étnica aymara, por encima de otras creencias religiosas en declaraciones y ceremonias públicas gubernamentales. Indicaron que aquello era una violación de la separación de la religión y el estado establecida en la constitución.

Sección III. Estado del Respeto de la Sociedad por la Libertad Religiosa

Líderes protestantes evangélicos continuaron afirmando que hubo casos de líderes indígenas que golpearon a pastores en áreas rurales remotas. También dijeron que los miembros de las comunidades indígenas continuaron expulsando a los misioneros y pastores de las comunidades rurales por practicar una religión que no se sometía a las creencias espirituales andinas tradicionales.

Sección IV. Política y Participación del Gobierno de los Estados Unidos

El acceso del gobierno de los Estados Unidos a funcionarios del gobierno continuó siendo limitado, a pesar de las solicitudes de reuniones por parte de la embajada.

Representantes de la embajada interactuaron rutinariamente con líderes religiosos para subrayar la importancia de la tolerancia y la libertad religiosa. En octubre, el Encargado de Negocios organizó una reunión interreligiosa para líderes religiosos de las comunidades protestante evangélica, católica, metodista, judía y musulmana para abordar asuntos relacionados con la libertad religiosa, como los desafíos de la inscripción y la discriminación percibida, y para convocar a los líderes religiosos al diálogo interreligioso. Los representantes religiosos abordaron lo que calificaron como la preferencia del gobierno por las ceremonias y rituales religiosos andinos y las tensiones públicas y de larga data entre la comunidad católica y el gobierno.